

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO APELACIÓN AUTO
DEMANDANTE	LUISA FERNANDA TORO MESA
DEMANDADOS	BANCOLOMBIA S.A.
RADICADO	05001-31-05-012-2020-00422-01
ORIGEN	JUZGADO DOCE LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
TEMAS Y SUBTEMAS	DECRETO PRUEBA
DECISIÓN	CONFIRMA

AUTO INTERLOCUTORIO No.175

Medellín, treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA TERCERA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta N°008 de 2023, se procede a dictar AUTO INTERLOCUTORIO en orden a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la **DEMANDANTE**, contra el Auto Interlocutorio del 25 de enero de 2023, proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES

La señora **LUISA FERNANDA TORO MESA** presentó demanda ordinaria laboral en contra de **BANCOLOMBIA S.A.** con el fin de que: **1)** Se declare que, entre estas existió contrato de trabajo, en virtud del cual la primera se benefició de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la demandada y los Sindicatos UNEB y SINTRABANCOL. **2)** Que, en consecuencia, se condene a **BANCOLOMBIA S.A.** al reconocimiento y pago de los beneficios establecidos en el acuerdo convencional dejados de cancelar desde el 1 de noviembre de 2016, y proceda a cancelar la diferencia salarial, y de prestaciones legales y extralegales adeudadas desde esa calenda hasta el 29 de septiembre de 2019. **3)** De igual modo, reclamó el pago de la indemnización por despido injusto contemplada en el artículo 38 de la citada Convención Colectiva, al igual que se ordene a la accionada efectuar el reembolso de lo descontado ilegalmente, cuantificado en la suma de \$16.856.661. **4)** Que se tengan las bonificaciones devengadas por el cumplimiento de metas como factor salarial, y, en consecuencia, se reliquiden todas las prestaciones legales y extralegales percibidas entre 2016 y 2017. **5)** por último, pidió condenar a la pasiva al pago de la indemnización moratoria contenida en el artículo 65 CST.

En subsidio de lo anterior, pidió: **6)** Que, en el evento de no reconocerse los beneficios convencionales, se condene a la demandada al pago de la indemnización por despido establecida en el literal C del Numeral 6.3 del Estatuto de Beneficios por valor de \$194.237.630.

Notificada la entidad accionada, procedió a contestar la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones (Archivos 10 ED).

PROVIDENCIA APELADA

En curso de la audiencia reglada en el artículo 77 CPLSS, precisamente en la etapa de decreto de pruebas, al revisar las solicitudes elevadas por la demandante, la Juzgadora no se pronunció respecto de las pruebas peticionadas como en poder de la parte demandada relacionadas con:

1. Certificación en la cual conste el número de trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo directo con Bancolombia S. A. al primero de enero de 2017 y al primero de julio de 2017.
2. Certificación en la cual conste el número de trabajadores beneficiarios de la convención colectiva de trabajo al primero de enero de 2017 y al primero de julio de 2017.
3. Certificación laboral expedida por el jefe de nómina de Bancolombia S.A., en la cual conste los factores salariales que toma el Banco para liquidar las cesantías, primas semestrales legales y extralegales y las vacaciones legales y extralegales de un trabajador beneficiario de la convención colectiva de trabajo.

RECURSO DE APELACIÓN

En contra de la anterior determinación, el extremo demandante presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación, insistiendo en el decreto de tales pruebas, las cuales debió aportar con la contestación a la demanda, conforme el numeral 2° del Parágrafo 1° del artículo 31 CPLSS, añadiendo aspectos de necesidad de la prueba de cara a demostrar lo solicitado en la demanda (Archivo 20 ED).

Al resolver sobre lo expuesto por el mandatario de la actora, la Juez de primer grado no repuso su determinación, en la medida en que, como en su momento lo arguyó la demandada, no fue allegado al plenario, prueba del derecho de petición a la accionada con el objetivo de remitir tal documental, por lo que no es viable la petición probatoria en este momento.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto del 12 de mayo de 2023, se dispuso el traslado para alegatos a las partes, habiendo presentado los mismos la parte **DEMANDANTE** y **DEMANDADA**, oportunidad en la que, señalaron los siguiente:

El apoderado de la parte **DEMANDANTE** sostuvo que, frente a lo argumentado por el Despacho de primera instancia en el auto recurrido, considera que al negar la práctica de las pruebas solicitadas en la demanda sustentadas en el artículo 31 del CPL y SS, omitió el deber jurídico de alcanzar la verdad, dada la pertinencia y conducencia de las mismas, por cuanto, guardan estrecha relación con las pretensiones incoadas, aceptando que la solicitud de práctica de pruebas en poder de la demandada, no se formuló de manera correcta, no obstante, el sentido de la petición es clara y persigue llevarle al Operador Judicial los elementos de convicción que permitan arribar a una decisión justa. Para ello, el Despacho cuenta con plenas facultades para interpretar el contenido de la demanda a fin de darle la dirección correcta, aduciendo que por el hecho de que no se haya solicitado adecuadamente esta prueba, no es factible desechar la misma como se dijo con antelación, deprecando se revoque la decisión de Primera Instancia (Archivo 04 ED).

Por su parte el apoderado de la parte **DEMANDADA** sostuvo que, es el Juez como director del proceso, quien determina la legalidad del medio de prueba y con ello la conducencia y pertinencia en el proceso para decidir la titularidad del derecho según los Artículos 51 y 53 del C.P.T y S.S.

Acto seguido, sostuvo que, la innovación de la Ley 712 de 2001 en el artículo 18 parágrafo 1° numeral 2°, es el aporte de aquellos documentos que, desde la norma sustantiva,

son tenencia del demandado, esto desde los Artículos 60 del Código de Comercio y 264 del C.S.T. pero no es para que desde una interpretación de esta norma se certifiquen situaciones, agregando que, frente a las personas de derecho privado, por certificación no se produce la confesión.

Luego, adujo que el aporte de documentos que, por mandato de la norma sustantiva, son tenencia del demandado, es diferente a certificados o informes de los artículos 275 a 277 del C.G.P., para lo cual el peticionario de este medio de prueba, debe probar de forma sumaria que no lo obtuvo en ejercicio del derecho de petición artículo 173 del C.G.P.

Finalmente, sostuvo que, desde la vigencia del Código General del Proceso, los artículos 275 a 277, regulan la prueba de informe, antes denominado oficios o certificaciones, los que decreta el Juez cuando la parte demuestre que al ejercer el derecho de petición no los obtuvo (Artículo 173 del C.G.P), así es como el certificado de lo pagado se respondió en el derecho de petición de fecha mayo 02 de 2017 (Archivo 03 ED).

PROBLEMA (S) A RESOLVER

El problema jurídico se centra en establecer si debió la Juez de primer grado decretar como prueba la remisión de oficios con destino a **BANCOLOMBIA S.A.** a efectos de que allegue a este proceso las certificaciones solicitadas por la señora **LUISA FERNANDA TORO MESA**.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en atención a lo reglado en el numeral 4º del artículo 65 del CPTSS, según el cual el auto que niega el decreto o la práctica de pruebas es susceptible del recurso de apelación, esta Sala de Decisión es competente para dirimir el presente asunto, para lo cual, se seguirán los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPTSS, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

De acuerdo con los argumentos de la alzada, recuerda la Sala que al tenor del artículo 51 CPLSS, en el procedimiento ordinario laboral son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la Ley.

Así mismo, atemperados al artículo 53 *ejusdem*, modificado por el artículo 8º de la Ley 1149 de 2007, el juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito, y en cuanto a la prueba de testigos, podrá limitar el número de ellos “(...) *cuando considere que son suficientes los testimonios recibidos o los otros medios de convicción que obran en el proceso* (...)”.

En ese sentido, el motivo que llevó a la Juzgadora a negar el decreto de los oficios con miras a obtener las certificaciones descritas en los antecedentes de esta providencia, gravita en que, no se observa que esa documental hubiere sido gestionada por la parte solicitante, lo que daba lugar a no decretarla como tal.

Para desatar el centro de la controversia, debe resaltarse que, a partir de la expedición del Código General del Proceso, norma supletiva a la que debe acudir en aquellos eventos no regulados en la codificación adjetiva laboral (Art. 145 CPLSS), la dinámica procesal de los litigios, en términos generales, cambió, pues la anterior regulación incluía dentro del rol del Juzgador, la condición de mediar entre las partes o entre estos y los particulares o entidades públicas para el recaudo de determinadas pruebas, debiendo librar cuanto oficio fuere solicitado con el objetivo de obtener, resáltese, documentos o información requerida para dar solución a la controversia.

Precisamente, con la reforma el legislador quiso comprometer a quienes hiciesen parte de los procesos, estableciendo en cabeza de estos que su actividad o capacidad de gestión girara en torno a la pronta solución de la contención. Ello se desprende, por ejemplo, de los deberes y responsabilidades estatuidas para las partes y sus apoderados en el artículo 78 CGP que en su

numeral 10° reza: “(…) Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir (…)”. (Subraya de la Sala).

Así mismo, de manera armónica al contenido de la norma en cita, el artículo 173 CGP presupuesta para las partes, el respeto a las oportunidades probatorias, exigiendo un trámite mínimo de cara a las solicitudes probatorias. Al respecto, regla:

“(…) Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señaladas para ello en este Código (…)

El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente (…)”

De lo anterior surge para la Sala que, dentro de su intención probatoria, cada parte interesada tiene la obligación de arrimar la documental que pueda obtener sin intervención o disposición del Juzgado, y este a su vez, según entraña la reseña legal, tiene el deber de decretar y procurar por la práctica de aquellas que los litispendientes no estén en capacidad de hacer llegar al conflicto por que no fue atendida la solicitud a través de la cual pretendía obtenerlas, no fue entregada a tiempo, o finalmente le fue negada.

Puestas de ese modo las cosas, en el particular se tiene que la PARTE DEMANDANTE insiste en que debe decretarse como prueba el oficio remitido a **BANCOLOMBIA S.A.**, con el fin de que esta certifique varias circunstancias que, en su criterio, son relevantes para respaldar su postura litigiosa; sin embargo, considera la Sala que, dicha información, ineludiblemente, es de aquellas que pudo haber obtenido mediante derecho de petición, pero, de la documental arrimada al plenario no se advierte que la demandante hubiere agotado gestión alguna ante la entidad accionada, a efectos de procurar la obtención de la información descrita, circunstancia que al amparo de la legislación, autorizaba a la Juzgadora para abstenerse de decretar aquella probanza.

De hecho, de lo único que reposa dentro del expediente en ese sentido, es la petición efectuada por la accionante a **BANCOLOMBIA S.A.** el 30 de octubre de 2019, solicitando la reliquidación de sus prestaciones, el pago de beneficios convencionales y el reintegro de sumas descontadas, pero en parte alguna, insiste la Sala, la parte peticionó a la sociedad que certificara los datos requeridos. Frente a ello, la pasiva emitió certificación en la que detalló, respecto de la cuestión nominal, la relación de lo devengado y descontado a la demandante entre 2018 y 2019 (f. 50 a 70 Archivo 03 ED).

De ahí que, en sentir de la Sala, atendiendo a lo expuesto hasta aquí, era deber del extremo interesado en el recaudo probatorio actuar con diligencia y promover su remisión con fines procesales, pero se echa de menos esa actividad.

Ahora, expuso el recurrente que, su solicitud probatoria tenía asidero, además, porque solicitó que fuese aportada con la contestación, al tenor de lo establecido en el numeral 2° del Parágrafo 1° del artículo 31 CPLSS; sin embargo, es pertinente indicar que dicho precepto establece en cabeza de la parte accionada la obligación de aportar los documentos en su poder, resáltese, que existan de antemano y deban involucrarse al asunto, circunstancia que, de no cumplirse trae como consecuencia la inadmisión de su réplica, y eventualmente tener por no contestada la demanda, pero en ningún modo, desliga a la parte accionante del cumplimiento de las cargas mínimas impuestas por el ordenamiento.

Aunado a lo anterior, nótese que la información solicitada no se trata de documentos que de tiempo atrás posea la accionada, sino que apunta a la certificación actual de varias circunstancias que consideraba importantes, situaciones que, reitera la Corporación, era de su cargo obtener, solicitándolas a la entidad, o demostrar en el proceso que realizó la actuación de requerimiento respectiva.

Bajo tal panorama, cumple confirmar el auto apelado. Las costas de esta instancia están a cargo de la demandante, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a la cuarta (1/4) parte del SMLMV.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 25 de enero de 2023, proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, de acuerdo con las razones esbozadas en la parte considerativa del presente proveído.

SEGUNDO: Las **COSTAS** de esta instancia están a cargo de la demandante, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a la cuarta (1/4) del SMLMV.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 093 del 01 de junio de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>